

República de Colombia

Rama Judicial



**JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA
BOGOTÁ D.C.**

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022).

REF: 2021-479

PROCESO: INCIDENTE DE DESACATO.

Se pronuncia el Despacho con relación al incidente de desacato presentado por el señor JOSE WILLIAM MENDEZ CELIS en contra del DIRECTOR ADMINISTRATIVO y COORDINADOR DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

ANTECEDENTES

1.- El señor JOSE WILLIAM MENDEZ CELIS inicio acción de tutela contra el DIRECTOR ADMINISTRATIVO y COORDINADOR DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, alegando la vulneración a su derecho de petición.

2.- Mediante fallo adiado 23 de julio de 2021 este Despacho resolvió tutelar el derecho fundamental de petición y en consecuencia ordenó al DIRECTOR ADMINISTRATIVO y COORDINADOR DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL para que, en el término improrrogable de 48 horas, procediera a dar respuesta de fondo y completa al derecho de petición elevado por el accionante el 4 de junio de 2021.

3.- Mediante auto de fecha 11 de febrero de 2022 y 23 de mayo de 2022 se requirió a la accionada para que indicara las acciones desplegadas teniendo en cuenta el cumplimiento del fallo de tutela, así como, se le requirió para que informara de manera concreta el nombre de la persona natural encargada de dar cumplimiento al fallo. (Archivo N° 09 y 14)

4.- Mediante auto adiado 7 de julio de 2022 se abrió el incidente de desacato y se ordenó requerir a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, quien allegó escrito de cumplimiento, solicitando el archivo del trámite incidental. (Archivos N° 19, 25, 27-30)

5.- Que al no haber pruebas que decretar, se procede a decidir el presente asunto.

CONSIDERACIONES

Señala el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que *"La persona que incumple una orden de un Juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar"* Acotando en su aparte final *"La sanción será impuesta por el mismo Juez, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción"*. El desacato es, por tanto, un incumplimiento que genera la imposición de una sanción agotando el cumplimiento del debido proceso.

La figura jurídica del desacato contemplada en la norma antes reseñada, fue erigida como un instrumento del cual dispone el Juez de conocimiento de la tutela, para sancionar a quien hace caso omiso de las órdenes impartidas con el propósito de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protección constitucional, pues tal protección resultaría inocua si no existieren instrumentos como éste, que aseguran el cumplimiento de las órdenes dispuestas para obtener la cesación de la conducta de la cual deviene la vulneración o amenaza del derecho fundamental amparado.

Por lo mismo, para el establecimiento del desacato de la tutela concedida se necesita que se estructuren los siguientes requisitos: 1. Que haya una resolución judicial de tutela que además de haberse concedido, señale en forma clara no solamente el derecho protegido o tutelado, sino también la orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectivo el amparo, con la indicación del plazo o duración en que debe cumplirse (Artículos 25 y 29 del Decreto 2591 de 1991); 2. Que la orden judicial de tutela sea obligatoria para quien la recibe, teniendo en cuenta que sólo el responsable del agravio deberá cumplirla sin demora, desde que se le pone en conocimiento (Artículos 27, inciso 1, 30 y 27 ídem); y 3. Que la persona ordenada haya incumplido la orden judicial de tutela, que por lo general se establece por la preclusión del plazo señalado en el fallo sin haberse adoptado la medida de protección ordenada.

Se precisa entonces la necesidad que asume el obligado a cumplir una orden de tutela, de poner a su disposición todas sus facultades, capacidades y recursos a fin de darle ejecución a lo ordenado, debido a la naturaleza protectora de la acción de tutela, porque, sabiéndose, como lo indica el fallo que da la orden, que existe un derecho constitucional fundamental lesionado o amenazado, es deber inmediato de todos, particularmente del obligado específicamente a ello, proceder a darle la protección adecuada sin dilación alguna. Y ello ocurre con mayor razón cuando los obligados son funcionarios públicos.

Así, la teleología del artículo 52 del Decreto 2591 es obtener a ultranza la efectividad de la tutela que ha sido concedida, creando para el accionante un mecanismo expedito que conduzca a plenitud al goce y disfrute del derecho fundamental que le ha sido vulnerado, siendo ésta la genuina finalidad del incidente de desacato, criterio orientador que, por lo mismo, no puede perderse de vista a la hora de interpretar las normas que regulan la materia, de donde se deduce que las sanciones allí previstas para quien desobedece la orden del juez constitucional, no constituye el fin mismo del incidente de desacato, sino apenas el medio a través del cual se obtiene aquello. No se concibe, por tanto, un incidente de desacato que persiga apenas un objetivo sancionatorio.

Descendiendo al caso *sub – examine*, se encuentra que en razón al requerimiento efectuado en auto de apertura calendario 7 de junio de 2022, la incidentada procedió mediante Resolución N° 002638 de 15 de junio de 2022 a pronunciarse de fondo sobre la solicitud de reajuste de invalidez que le había sido concedida al señor José William Méndez Celis en acto administrativo N° 4049 de 2015.

Se observa que la Resolución N° 002638 de 15 de junio de 2022 cumple con los caracteres de claridad y congruencia, en la medida que explica los fundamentos fácticos y normativos por los cuales no hay lugar a conceder el reajuste reclamado por el actor el día 4 de junio de 2021. Aunado a ello, según consta en los archivos 28 y 29, el aludido acto administrativo fue notificado en debida forma al correo electrónico luzmarina.enciso1@gmail.com - josewilliammendezcelis@gmail.com, reportados por el actor como dirección de recibo de notificaciones.

En vista de lo anterior, hay lugar a considerar que se ha configurado un hecho superado, que torna improcedente el incidente de desacato al fallo de tutela, tema sobre el que la Corte Constitucional ha enseñado:

“Esta corporación en reiterada jurisprudencia ha manifestado en relación con el hecho superado, que éste se origina con ocasión de la cesación de la acción u omisión impugnada de una autoridad pública o un particular, lo que consecuentemente torna improcedente la acción iniciada, pues no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer”. (Sentencia T-173/93).

(...) si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente”. (Sentencia T – 988/02)

Así las cosas, tenemos que los incidentados, el DIRECTOR ADMINISTRATIVO y COORDINADOR DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, dieron cumplimiento con el derecho de petición tutelado al accionante, al haberse logrado obtener la respuesta clara y de fondo de acuerdo a lo solicitado el 4 de junio de 2021, conllevando con ello una carencia total de objeto, por hecho superado, y por ende

sin que haya lugar a imponer sanción por desacato, ordenándose en consecuencia, el archivo de las presentes diligencias.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.,**

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE de IMPONER SANCIÓN por hecho superado, contra los responsables del cumplimiento a fallos de tutela de los incidentados **DIRECTOR ADMINISTRATIVO y COORDINADOR DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, por los motivos expuestos en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes e intervinientes el contenido del presente proveído, dejando las constancias de rigor, en los términos de que trata el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5 del Decreto 306 de 1992.

TERCERO: Cumplido lo anterior, **ORDENAR** el archivo de las presentes diligencias.

NOTIFÍQUESE,

**SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ**

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 67

Hoy 24 de junio de 2022

CAROLINA SANTAMARIA LUNA
Secretaria

Firmado Por:

**Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **83879f5e9aad38c9e6ed77cf01a5072733412353eb9e1214ebf104aad3a20301**

Documento generado en 23/06/2022 07:46:12 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**